

AUMENTAR EL COMPROMISO CON AFGANISTÁN RETIRANDO LAS TROPAS

Alejandro Pozo y Arcadi Oliveres

El reciente y lamentable ataque sobre un convoy militar español, afgano y estadounidense que ha ocasionado dos muertos y cuatro heridos españoles merece dedicar unas líneas a abordar tres cuestiones con el ánimo de aportar claridad sobre aquello que hace el ejército español en Afganistán. En primer lugar es necesario insistir en que la operación militar ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a Afganistán), liderada por la OTAN y participada por 780 soldados españoles no es una operación de Naciones Unidas, como defiende el PSOE y buena parte de los medios de comunicación. No existe en Afganistán un solo casco azul. Aunque autorizada por la ONU, ISAF es una operación de la OTAN, está dirigida por la OTAN (no por la ONU) y responde a los intereses y maneras de actuar de la OTAN. ¿Qué hace entonces la OTAN (y España) en Afganistán? El Ministerio de Defensa asegura que se trata de una operación de paz; para la opinión pública española son labores de asistencia humanitaria y reconstrucción; y la amalgama de argumentos contradictorios esgrimidos por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso invita a concebir la falta de transparencia como característica base de esta misión. Eso sí, todas las partes insisten en diferenciarse de las operaciones de combate que realizan otros países (mención aparte merece las recientes declaraciones del portavoz popular Gustavo de Arístegui de fusionar la ISAF y Libertad Duradera, la operación antiterrorista de EE UU contraria al derecho internacional). Sin embargo, el Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer indicó, como no podía ser de otra manera, que sólo existe una OTAN en Afganistán (y una sola estrategia global), y Condolezza Rice, titular de Exteriores de EEUU, país que lidera la OTAN, la ISAF y Libertad Duradera, manifestó que “la población [europea] debe comprender que no es una misión de paz”. Si Estados Unidos, el actor que controla y dirige, no diferencia actuaciones ni operaciones militares, englobadas en su conjunto en la denominada “Guerra contra el Terror” (cuyo segundo pilar es la intervención en Irak), que en España pretendamos establecer límites, aun suponiendo buenas intenciones, resulta ingenuo.

La segunda pregunta apunta a si es razonable atribuir todos y cada uno de los ataques a las tropas internacionales a los taliban. En este país operan más de 800 grupos armados diferenciados, muchos de ellos vinculados a los taliban, pero muchos otros no relacionados e incluso contrarios a sus prácticas. Las conexiones entre políticos (algunos de ellos taliban), comerciantes, barones de la droga y señores de la guerra, dentro como fuera de las fronteras afganas son tan evidentes como reconocidas (Human Rights Watch aseguró que un 60% de los legisladores tienen relaciones con señores de la guerra). Por otro lado, cabe insistir en que una parte de los grupos organizados armados se han constituido como respuesta a la equivocada y condenable estrategia militar occidental de ataques y bombardeos indiscriminados sobre núcleos habitados (los “daños colaterales” duplican las muertes del 11-S). Incluso los grupos taliban son “contratados” por sus bases de apoyo para que les defiendan de agresiones externas, tanto occidentales como afganas –Estados Unidos ha financiado y armado a diversos grupos de señores de la guerra como contrapartida por los apoyos recibidos en la búsqueda de elementos taliban y de Al Qaeda. De acuerdo con el New York Times,



Afganistán se ha convertido entre 2006 y 2008 en el primer importador de armamento de EEUU, y es muy probable que parte de los 11.400 millones de dólares en armas transferidos (el PIB del país es de apenas 7.000 millones) vaya a parar a alguno de los grupos que combaten a las tropas occidentales. En el clima general de corrupción, redes mafiosas y, en particular, el rechazo a lo que se percibe como una ocupación militar extranjera, es difícil identificar claramente a los autores del ataque a las tropas españolas (junto a las afganas y norteamericanas), sobre todo si tenemos en cuenta que éste ocurrió en Shindand, el distrito en el que en agosto un bombardeo estadounidense acabó con la vida de noventa civiles afganos, según ha corroborado la ONU.

Finalmente, cabe preguntarse sobre las presuntas buenas intenciones en lo que concierne a la reconstrucción de Afganistán y la mejora de las condiciones de vida de su población. 92 de cada 100 euros de la contribución mundial oficial a Afganistán hasta 2006 son de carácter militar, y la proporción parece mantenerse en la actualidad. La situación es más grave, si cabe, en el caso español: en asuntos militares (más de nueve de cada diez euros), España no ha dedicado ninguno a programas de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes y sólo ha proporcionado el 0,68% de los fondos internacionales para el desminado. Peor es el panorama sobre las crisis humanitarias: España no ha aportado un solo euro a las tres llamadas urgentes de 2008 en Afganistán, destinadas, entre otros aspectos, a paliar los efectos de la permanente sequía y la subida del precio de los alimentos. Entre 2000 y 2008, apenas ha donado el 0,31% de las contribuciones internacionales a crisis humanitarias y, de acuerdo con el Ministerio de Finanzas afgano, Madrid sólo ha aportado el 10,11% de los fondos prometidos para la reconstrucción desde 2001, lo que la sitúa en la posición 26, sólo por delante de Turquía y por detrás de China, India o Irán. Ante este panorama, es legítimo afirmar que, para los gobiernos del mundo occidental y España en particular, Afganistán sólo es una prioridad en cuestiones militares: las de Occidente. Los indicadores básicos de desarrollo en Afganistán no han mejorado, y la población sigue muriendo de las mismas banalidades evitables que antes. Es razonable pensar que esta situación continua siendo desastrosa porque no se ha realizado ningún esfuerzo significativo para revertir estas condiciones. La ocupación en Afganistán no responde a las necesidades de su población sino a los intereses militares de Estados Unidos y sus aliados.

España debería retirar sus tropas de Afganistán, pero no olvidarse de este país. Es necesario que desempeñe un rol determinante para convencer al resto de países para invertir las prioridades. En primer lugar, es necesario acabar con las incursiones militares, los bombardeos y la obsesión de captura de presuntos terroristas. Segundo, debe fomentarse el diálogo con todos los grupos armados (como pretende el Gobierno afgano e impide EE UU), priorizando las conversaciones con sus bases de población, con las numerosas estructuras civiles hasta ahora ninguneadas y las medidas diplomáticas con los países vecinos (para evitar su histórica y perniciosa injerencia en los asuntos afganos a través del apoyo a las distintas facciones). Tercero, mostrar una implicación sincera y comprometida y promover la satisfacción de las necesidades básicas de la población. El PIB afgano es cinco veces inferior al gasto militar anual de EEUU en Afganistán. Si estas cantidades se dedicasen a los afganos y afganas y no a satisfacer las necesidades militares de Occidente, Afganistán sería un país mucho más seguro para sus habitantes.